

José Luis Romero V.

Académico Instituto de
Estudios Urbanos y
Territoriales UC



Memoria y mandato rural

El presidente electo José Antonio Kast obtuvo un 65% de apoyo entre las 263 comunas rurales del país, logrando mayoría en 251 de ellas. Este arrollador resultado sobre lo que es una minoría territorial —el 25% de la población nacional vive en comunas rurales— debiese ser motivo para aquilatar la responsabilidad que conlleva, y que se explica por la contingencia y la historia reciente. Tras el estallido social, y durante los distintos intentos constituyentes, voces progresistas calificaron prácticas tradicionales propias del mundo rural —el rodeo, por ejemplo— como un retroceso humano y social. También se cuestionó el uso de los símbolos nacionales en pos del reconocimiento de la plurinacionalidad. La incompreensión desde una mirada “urbana” de estos y otros fenómenos locales fue calando hondo en la ciudadanía rural, a pesar de que la primera propuesta (2022) dedicara artículos completos a este tipo de zonas.

Un segundo elemento a considerar, por sobre la agenda nacional con foco en seguridad e impulso económico, es la dimensión más estructural de las brechas de la ruralidad: la sensación de abandono permanente por parte del Estado. Según el último Censo (2024), en un tercio de las regiones del país las personas de comunas rurales poseen dos años menos de escolaridad que en zonas urbanas; un 20% de la población rural aún se abastece de agua fuera de la red pública y un 41% tiene acceso a Internet fijo. Si bien la pobreza por ingresos y multidimensional ha disminuido significativamente durante los últimos 20 años, estas mediciones siguen arrojando el doble que las zonas urbanas. No se trata solo de carencias materiales, sino de una percepción acumulada de rezago e incumplimiento de promesas.

La magnitud del respaldo no constituye únicamente un dato electoral, sino una oportunidad para fortalecer la cohesión territorial, emparejar la cancha y devolver la esperanza en el Estado como motor de acción y articulación. Sin la participación del sector privado en una agenda rural para los 100 primeros días, centrada en educación, conectividad y servicios básicos, por ejemplo, no será posible traducir el mandato rural en políticas públicas capaces de enfrentar desigualdades largamente postergadas.